

Chile, país Potemkin

Juan Ignacio Brito
Periodista



Chile quedó a oscuras el martes debido a una falla tan incomprensible como inaceptable. Fue el peor apagón desde el 27 de febrero de 2010. Hace justo 15 años, un cataclismo sacudió al país. Esta vez, sin embargo, había calma chicha. Los técnicos han explicado que sobrevino una serie de problemas luego de una falla en la línea eléctrica entre dos subestaciones en la Región de Coquimbo. Todo apunta a una mezcla fatídica de impericia, imprevisión, descoordinación, irresponsabilidad y negligencia de parte de privados y el Estado.

No es un fenómeno aislado. El otrora jaguar de América Latina se ha ido empequeñeciendo, transformándose paso a paso en un amodorrado gato de campo. Hasta hace unos años, nuestros gobernantes nos hablaban de su “sueño” de hacer de Chile un país desarrollado. Hoy nos conformaríamos con ser un sitio donde las cosas funcionan. En lugar de ello, nos hemos convertido en un país Potemkin, donde todo simula estar bien, pero al final nada es lo que parece porque muchos no hacen lo que deben.

No hay que escarbar profundo ni lejos para encontrar ejemplos. La Corfo es la agencia estatal encargada de promover la innovación, el emprendimiento y la competitividad. Sería esperable, entonces, que cuando ingresan recursos frescos a sus arcas, estos fueran destinados a esos fines. Pero no; la agencia ha devenido en bóveda fiscal para que “la mejor directora de Presupuestos de la historia” haga trucos contables y cuadre la caja. A propósito de esto: la Ley de Presupuestos fija los ingresos y gastos a través de partidas. Pero también contempla la “flexibilidad presupuestaria”, que permite al gobierno hacer traspasos como el que hizo con Corfo, moviendo fondos de un lado para otro. Las cosas son como son, no como se dice: la Corporación de Fomento es, en realidad, caja de último recurso, y la Ley de Presupuestos fomenta la misma discrecionalidad en el gasto que, se supone, debería evitar.

Otra muestra: la Corte Suprema emite fallos supuestamente definitivos, pero en los hechos negociables, como ocurrió con la toma de San Antonio. Ganancia para las partes: el gobierno chuteó – quizás hasta más allá de su mandato – un desalojo que no quiere ordenar; los propietarios encontraron una salida que protege sus intereses particulares; los habitantes de la toma validaron la ocupación. Pérdida para el bien común: el inefable Moya, el único ausente en la mesa de negociación, pagará los platos rotos. La incertidumbre jurídica ha dado un paso adelante.

Se equivocan quienes creen que esto se arregla solo con empujones comunicacionales, declaraciones altisonantes, comisiones técnicas, reformas legales puntuales o medidas drásticas. La ubicuidad de nuestros problemas sugiere que en la base existe un cáncer: la crisis moral. El Chile Potemkin es una consecuencia, no una causa.